



INFORME DE LA COMISION POLITICA

En memoria de Antonio Romero, jornalero, comunista, diputado, senador, alcalde moral de Málaga, Presidente del Partido Comunista de Andalucía, y una persona inmensamente buena. Nos dejó el 29 de noviembre de 2024 después de una vida dedicada a la defensa de los derechos de la clase trabajadora, a Izquierda Unida, al Partido Comunista de España y a la lucha por el socialismo. Que la tierra andaluza por la que tanto luchó le acoja con cariño.

I.- La victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos ha provocado un incremento de la presión militar de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. La autorización de Francia, Reino Unido y los Estados Unidos para que Ucrania utilice misiles de largo alcance occidentales contra objetivos en suelo ruso, es sin duda una amenaza para la paz mundial, habiendo provocado la revisión por Rusia de sus protocolos de utilización de armas nucleares tácticas en respuesta al incremento de la beligerancia de la OTAN. El Partido Demócrata de Estados Unidos, de forma irresponsable, está provocando una peligrosísima escalada militar en Europa en los escasos dos meses que le quedan al frente de la Casa Blanca.

La gravedad de la situación obliga a incrementar los esfuerzos por buscar una solución diplomática a la guerra en Ucrania a la mayor brevedad posible, utilizando los esfuerzos negociadores puestos en marcha por Turquía, China y países latinoamericanos y africanos. Haciendo un contundente llamamiento a las Naciones Unidas para que se impliquen una solución diplomática urgente dado que ni de la Unión Europea ni de la OSCE se puede esperar la más mínima iniciativa de construcción de paz.

Paralelamente continúa el genocidio del pueblo palestino realizado por Israel en Gaza, así como la permanente anexión al Estado sionista de los territorios palestinos de Cisjordania, incumpliendo las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y todos los acuerdos y resoluciones adoptados sobre la cuestión Palestina por las Naciones Unidas. Si bien asistimos a un compromiso de Israel de concluir su agresión militar a El Líbano, lo cierto es que no han cesado los ataques a la población libanesa por parte de la potencia agresora y veremos cuánto tiempo dura este supuesto compromiso de Israel con el alto el fuego y si igualmente se traslada respecto a los demás países de la región que sistemáticamente son agredidos por el Estado sionista forajido situado al margen de la legalidad internacional a pesar de haber sido constituido precisamente en aplicación del derecho internacional. Hacemos un llamamiento a todos los países que se consideran naciones civilizadas, para que en el momento que haya oportunidad ejecuten la orden de detención contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, dictada por la Corte Penal Internacional. Denunciamos la

brutal ofensiva del integrismo islámico contra Siria, sin duda con el apoyo de los EEUU, potencia que continúa utilizando al integrismo islámico para acabar con uno de los pocos único país multi religiosos y con gobierno laico del mundo árabe.

El PCE, a través de los diputados y diputadas de Izquierda Unida en el Congreso, ha puesto en marcha una red internacional para detectar el envío a Israel de armas o materiales susceptibles de utilización militar y poder detenerlos. Tanto en cumplimiento del acuerdo del Gobierno español que impide cualquier envío o colaboración en materia militar con Israel, como en apoyo a la resolución de la Corte Internacional de Justicia que ordenó que se impidiera cualquier actuación de Israel que sirviera para continuar perpetrando el genocidio del pueblo palestino. En las últimas semanas hemos conseguido que ningún barco del que se conozca que transporta armas o materiales susceptibles de utilización militar rumbo a Israel pueda tocar en los puertos españoles, si bien nuestra intención es conseguir la paralización de estos barcos e incautación de su carga para ser puesta a disposición de la Corte Internacional de Justicia como material probatorio que acredite el genocidio cometido con el pueblo palestino.

Saludamos la exitosa cumbre de los BRICS, liderado por las cinco economías emergentes más importantes del mundo (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica), que ha cerrado el 23 de octubre su XVI encuentro realizado en Rusia. Es una buena noticia para el multilateralismo que alianzas alternativas a las hegemonizadas por los Estados Unidos y el resto de potencias imperialistas y militaristas ocupen posiciones en la escena internacional. Además de las naciones fundadoras, la Cumbre contó con la presencia de los nuevos integrantes (Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos) y otras naciones que buscaban formar parte del bloque. Durante la cumbre se dio impulso a los proyectos de desarrollo que va a financiar el Banco de Desarrollo BRICS, que ya ha financiado unos 100 proyectos por un total de 33.000 millones de dólares.

No podemos sin embargo abstenemos de criticar los impedimentos que ha encontrado la República Bolivariana de Venezuela para integrarse como miembro de este acuerdo multilateral, máxime porque sorprendentemente dichos impedimentos han sido puestos por un gobierno progresista, el Gobierno de Brasil, en una actitud que sin duda rompe con la tradición de rigurosidad diplomática de este país durante los gobiernos de izquierdas.

Felicitemos al Frente Amplio de Uruguay por su triunfo electoral, estamos atentos a las elecciones presidenciales en Ecuador del mes de febrero dada la situación compleja del país que necesita un cambio de rumbo urgente ante la falta de seguridad, la corrupción, los cortes de electricidad y el sometimiento a Estados Unidos del gobierno de Noboa. Nos preocupan la confrontación dentro del MAS en Bolivia que pone en riesgo la continuación del proceso de desarrollo de la República plurinacional creada con al llegada a la presidencia de Evo Morales y también seguimos la inaceptable situación de Perú que tras el golpe de estado hay una involución continua que abarca a todas las esferas de la vida, la población necesita un apoyo internacional e internacionalista urgente. Felicitemos al Partido PASTEF de Senegal que marca una impronta en el Sahel

con movimientos de izquierda en crecimiento que pretenden acabar con gran influencia colonial que conservan las potencias occidentales.

II.- Saludamos el inicio del proceso de Convocatoria por la Democracia lanzado por Izquierda Unida el pasado 23 de noviembre en Madrid y que debe continuar extendiéndose por todo el territorio del Estado mediante la realización de encuentros, debates y propuestas. Es el camino para ir generando una amplia alianza que mejore la calidad de nuestra democracia, que permita avanzar hacia una democracia también económica y social y que se convierta en la principal barrera frente al avance del fascismo y las ideas autoritarias, ultra neoliberales, racistas, homófonas y machistas.

La actual ofensiva reaccionaria contra los avances que las luchas de la clase trabajadora han conseguido, nos obliga a defender los derechos conquistados y a la vez a organizar la confrontación frente a la ola autoritaria. Necesitamos ir más allá de la democracia entendida como representación formal de la voluntad popular, para lo que Izquierda Unida trabaja en poner en marcha un amplio proceso para debatir sobre cómo hacer avanzar la democracia no solo en derechos y libertades, sino en la capacidad de intervenir y decidir en el desarrollo económico y ecológico de nuestro país.

Este proceso de tejer alianzas en defensa de las conquistas en materia de democracia y derechos de los trabajadores -conseguidos por las luchas de la clase obrera-, es inseparable del debate y reforzamiento de nuestra política de alianzas. Estamos convencidos de lo acertado de la afirmación de Simón Bolívar: "Unidos seremos fuertes y mereceremos respeto, divididos y aislados pereceremos". El principal objetivo en esta estrategia es dotarnos de capacidad para estar en las mejores condiciones de disputa política en el seno de la izquierda y frente a la derecha y la ultraderecha.

A través de Izquierda Unida, el PCE debe dotar a la política de alianzas de base y estrategia eficaces y coherentes para la construcción de espacios unitarios de acción política, y también electoral. La tarea es conseguir que todas las organizaciones políticas de izquierda con arraigo territorial, político, institucional y social, trabajemos por la construcción de espacios compartidos para conseguir combatir las políticas autoritarias y ultra neoliberales.

Las alianzas han de ser programáticas para avanzar en derechos, libertades y vidas dignas. Deben reflejar unidad popular para defender los derechos conquistados y construir lazos comunitarios y de solidaridad, aglutinando fuerzas para garantizar gobiernos que apliquen políticas democráticas y de izquierda ante la ofensiva reaccionaria. Se trata de trabajar para garantizar que las alianzas multipliquen la fuerza para desarrollar agendas sociales, políticas, sindicales y de gobierno. Que garanticen pan, trabajo, techo, dignidad y paz, avanzando así en la construcción de un bloque histórico que, independientemente de las fórmulas electorales, dispute la hegemonía que hoy está ganando la derecha en todo Occidente.

Izquierda Unida se ha volcado en los últimos años en la construcción de alianzas políticas, tanto con Podemos como con Sumar. El Partido Comunista de España siempre ha impulsado estas alianzas y ha aplicado un método generoso,

anteponiendo lo fundamental -los intereses de la clase trabajadora- a los intereses exclusivamente partidarios o en este caso de Izquierda Unida. Pero esta actitud responsable no ha sido correspondida ni entendida en demasiadas ocasiones, por lo que debemos tomar medidas para fortalecernos y así garantizar métodos más equitativos de construcción de alianzas.

Nuestra ideología marxista y revolucionaria es una herramienta que nos garantiza la suficiente fortaleza para impulsar programas que superen el capitalismo y refuercen nuestra capacidad impugnatoria del Estado burgués, elemento fundamental en un momento en el que es imprescindible mantener el gobierno de coalición pero que a la vez nos obliga a diferenciamos claramente del PSOE a través de propuestas políticas transformadoras. Nuestras alianzas tienen límites marcados por la voluntad transformadora y de construcción de un mundo multilateral sin alianzas militares como la OTAN. Donde imperen la paz y un desarrollo sostenible para el planeta. Sabemos que en la unidad está la fuerza y por eso en este nuevo proceso, nuestro horizonte es fortalecer lo ya conseguido. Esto nos lleva a consolidar las alianzas con las fuerzas de la izquierda plurinacional que hasta ahora no habíamos conseguido coordinar en la construcción de ese bloque de izquierdas, que tiene voluntad de ser hegemónico en todo el Estado.

III.- La situación política España sigue estando marcada por el permanente acoso de la derecha y la ultraderecha al Gobierno de coalición de izquierdas y las dificultades para impulsar la acción de gobierno desde una alianza parlamentaria de fuerzas democráticas, donde convivimos con fuerzas políticas nacionalistas de derechas.

Con ocasión de la tragedia causada por la DANA en el País Valencia, asistimos a una de las más brutales campaña de desinformación y acoso político organizadas por la derecha mediática, por el Partido Popular y por sus aliados de la ultraderecha franquista. No tiene límites la capacidad de estos actores reaccionarios para poner en marcha discursos negacionistas de la realidad y responsabilizar al Gobierno de coalición de la dejación de responsabilidades que el PP ha realizado, así como de las consecuencias de sus políticas ultra neoliberales de recorte de las instituciones del Estado.

A pesar de esta realidad seguimos avanzando en recuperación de libertades y garantías democráticas, pero encontramos grandes dificultades para avanzar en materia laboral económica y fiscal, por lo que son estos ámbitos los que deben concitar nuestros mayores esfuerzos.

La reciente transposición de una Directiva europea que establece una tributación mínima del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes grupos empresariales, ha sido un importante éxito que ha venido acompañado de otras medidas fiscales moderadamente positivas. La Directiva permitirá recaudar 7.500 millones más, que hoy se pierden en paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Y hará que los grandes grupos empresariales nacionales contribuyan más a la Hacienda Pública. El objetivo es acabar con una situación arrastrada en la que las grandes empresas, que son las que más beneficios obtienen, son las que menos contribuyan al sostenimiento del Estado Social y a

los mecanismos de redistribución de la riqueza. El resto de medidas fiscales aprobadas contribuirá a recaudar 6.000 millones de euros más, lo que permitirá avanzar en el cierre de la brecha con Europa en el nivel de contribución fiscal que está entre 4 y 5 puntos por debajo de la media, recursos imprescindibles para seguir ampliando las políticas sociales e impulsando medidas de transición verde y reindustrialización en clave digital.

Hemos elevado la tributación de los rendimientos del capital en el IRPF y mantenido en lo esencial el impuesto a la banca sin conseguir ir más allá de lo que conseguimos hace un año. Pero todavía no hemos conseguido renovar -y mucho menos hacer estructural y permanente- el impuesto a los grandes beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, que sin duda son las que más deberían en este momento contribuir para compensar las terribles consecuencias de la DANA. Los fenómenos meteorológicos extremos son responsabilidad y consecuencia de un modelo de producción y consumo basado en la destrucción de ecosistemas a consecuencia de la permanente emisión de carbono. No cabe duda de que las empresas energéticas, que controlan el sector de la energía, son uno de los sectores más beneficiados por esta criminal forma de producción. Las empresas energéticas controlan los precios de la energía y por tanto la generación de beneficios multi millonarios que deben ser objeto de una tributación debidamente progresiva, que les obligue a contribuir debidamente para financiar los mecanismos del Estado social para corregir desigualdades.

El Partido Comunista de España ha realizado un importante trabajo en esta materia desde la comisión de Hacienda del Congreso, siendo destacado el trabajo de nuestra camarada Engracia Rivera junto al resto de compañeros y compañeras de esta comisión. Pero es mucho el trabajo político y la disputa que debemos realizar para que El grupo parlamentario de la izquierda Plurinacional continúe dando con éxito la batalla para hacer realidad impuestos que graven a los que más tienen. Como el impuesto a las grandes herencias o a los bienes de lujo o que termine con el *dumping fiscal* de algunas CCAA o facilitar el acceso a la vivienda gravando con IVA los pisos turísticos y eliminando los privilegios de las SOCIMIs.

Simultáneamente hemos asistido a la ruptura de la mesa de diálogo tripartita entre gobierno, patronal y sindicatos para la reducción de la jornada de trabajo, por lo que corresponde desplegar el máximo apoyo a los sindicatos de clase y al Ministerio de Trabajo para vencer las resistencias de los socios de gobierno a una medida de reducción de la jornada de trabajo que debería aprobarse en el Consejo de Ministros con tiempo para entrar en vigor a principios del año 2025, tal y como establece nuestro programa electoral.

Las conversaciones para la subida del salario mínimo continúan pero también en este objetivo las organizaciones empresariales se resisten a cualquier subida incluso equiparable al IPC. Debemos organizar el máximo de presión política y movilización en reivindicación de una subida del salario mínimo entre el 5 y el 6%, como están exigiendo los sindicatos, una subida que permita seguir recuperando capacidad adquisitiva de los salarios, máxime teniendo en cuenta que la inflación sigue existiendo, que devalúa la capacidad salarial de los y las

trabajadoras y que, en especial, la escalada de los precios de la vivienda no ha conseguido ser frenada.

No podemos dejar de mencionar la aprobación de un nuevo Reglamento de Extranjería, que junto con la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de regularización, va a permitir la regularización de cientos de miles de extranjeros que viven y trabajan en nuestro país pero que no han visto reconocidos sus derechos, en especial su derecho a ser debidamente documentado. Esta aprobación contrasta con la oleada de políticas xenófobas, racistas y discriminatorias de las personas extranjeras -ya sean migrantes o refugiadas- que recorre toda Europa y que se ha convertido en uno de los principales argumentos de la extrema derecha para hacer campaña política. Poner a los penúltimos a pelear con los últimos de la escala social. Hemos sido críticos y somos conscientes de que el nuevo Reglamento de Extranjería no es ni mucho menos perfecto, a pesar de que representa un claro avance y traslada un mensaje de progreso para el resto de gobiernos europeos en estos tiempos de avance del fascismo. Un mensaje que profundiza en la política del Gobierno de coalición de que el reconocimiento de derechos para la clase trabajadora es bueno para un país y es bueno para la economía. El Partido Comunista de España e Izquierda Unida seguimos trabajando entre los distintos grupos parlamentarios, con los Ministerios de Inclusión, Trabajo e Infancia y Juventud, y con las organizaciones sociales que representan a migrantes y refugiados, para que la norma ya aprobada se mejore sustancialmente en distintos aspectos, como por ejemplo que los solicitantes de protección internacional denegados o que no puedan obtener documentación de su país, personas que no tengan familiares en España ni puedan tener contrato de trabajo, personas con enfermedades no sobrevenidas cuyo traslado a su país ponga en peligro su integridad física o mental, o personas que pueden acreditar haber trabajado en España 6 meses en los últimos 2 años (el antiguo sistema de arraigo), puedan optar al arraigo con computo del total de tiempo que hayan permanecido en España.

IV.- El PCE conoce el carácter burgués del Estado en el sistema capitalista y sabemos que únicamente la conquista del poder político permitirá iniciar el proceso de construcción de un Estado socialista que exprese plenamente la voluntad e intereses de la clase obrera. A la vez, somos conscientes de que numerosas conquistas obreras han ido introduciendo en el actual Estado mecanismos de reducción de las desigualdades que mejoran la vida de la clase trabajadora y que necesitan, para ser útiles y eficaces, de la expansión y fortalecimiento de los servicios públicos y del sector público. Por eso, la derecha y las políticas ultra neoliberales defienden la reducción de lo público para debilitar o anular si es posible los mecanismos estatales de corrección de las desigualdades. El PCE no defiende una estrategia de abandono de la disputa dentro del Estado y sus instituciones para sustituirla por una ilusoria construcción de mecanismos de supuesta organización en paralelo de un Estado alternativo, porque no hay posible convivencia ni disputa entre el Estado burgués y un supuesto Estado alternativo que sea coetáneo del primero en el marco de un mismo sistema capitalista. Por eso estamos muy atentos y confrontaremos la difusión por la ultraderecha de mensajes que equiparan la incompetencia de los gobiernos de la derecha y su dejación a la hora de atender las necesidades de nuestro pueblo, con la prescindibilidad del Estado y en especial de los

mecanismos de un Estado social de corrección de desigualdades a través de servicios públicos bien dotados de recursos y eficaces, al servicio de las necesidades materiales de las mayorías sociales.

Es urgente impulsar un plan de reconstrucción del País Valencia tras la DANA, priorizando un cambio radical en las políticas urbanísticas y medioambientales. como único y más eficaz mecanismo para impedir la repetición de esta tragedia incluso de forma agravada. Vista la incapacidad y dejadez del Gobierno de la Comunidad Valenciana, cobra más importancia que el Estado asuma el mayor protagonismo posible en la reconstrucción, como ya venimos reivindicando desde los primeros días tras la catástrofe, en los que las instituciones autonómicas estuvieron absolutamente ausentes e hicieron dejadez en sus obligaciones de atender a las miles de víctimas ocasionadas.

Hay ya varias medidas en marcha desde el Gobierno de España para compensar y reparar a las víctimas de la DANA en bienes y servicios de primera necesidad. A fecha de hoy más de 2.500 empresas han solicitado acogerse a los ERTes aprobados por el Ministerio de Trabajo, lo que va a beneficiar a más de 27.000 trabajadores y trabajadoras. Ya se han aprobado los *permisos climáticos* que realmente supone la capacidad de la representación sindical de parar la actividad en una empresa cuando exista un peligro para la integridad o la vida de los trabajadores, motivado por cuestiones climáticas y en los supuestos en los que la dirección de la empresa es incapaz de garantizar los derechos de la clase obrera. Un importante avance sobre todo por lo que significa de transferencia de la capacidad de control de la actividad de la empresa a la representación de las y los trabajadores. También el Ministerio de Infancia y Juventud ha puesto en marcha medidas específicas para atender a las víctimas de este colectivo.

Nuestro agradecimiento a todos los y las empleadas públicas y voluntarios y voluntarias -en especial a los organizados por el Partido Comunista de España en el País Valencia, PCPV- que están trabajando, atendiendo a las víctimas de la catástrofe así como paliando los daños y reconstruyendo todo lo afectado.

Especial agradecimiento a los servicios de emergencia y Protección Civil y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército. Las prioridades y la magnitud de la tragedia han puesto de manifiesto un trabajo abnegado de los servicios de emergencia, sanitarios, de protección civil. Especialmente destacado es el esfuerzo de la tropa y los suboficiales de la UME, o de profesionales sanitarios y de emergencias, que han estado a pie de barro trabajando junto a voluntarios y voluntarias, Muchas veces más allá de los horarios y tareas asignadas.

Lo anterior no obsta que hagamos mención especial a la irresponsable actitud del Partido Popular -intentando tapar su incompetencia y dejación en sus tareas de gobierno- al entregar la responsabilidad de implementar decisiones políticas para la reconstrucción a altos mandos militares que ni han pasado por las urnas, ni muestran el debido respeto al funcionamiento de las instituciones democráticas. El ejemplo dado por estos altos mandos exigiendo que se les ponga unos salarios exorbitados, por encima del tope actual del mayor salario público de la Comunidad Autónoma o incluso por encima del salario que venían cobrando previamente como funcionarios de la administración, nos

recuerda que habitualmente quienes se llenan la boca de discursos patrióticos suelen priorizar su interés económico por encima de cualquier otra consideración. Una vicepresidencia y una secretaría autonómica para la reconstrucción son responsabilidades políticas en una democracia, y no es aceptable que sus titulares anuncian que no acatarán órdenes políticas, afirmación que emula los argumentos utilizados históricamente por los militares para acabar con las democracias e instaurar dictaduras. Que los militares se definan como apolíticos a la vez que se integran en un gobierno de la derecha, es una contradicción que oculta un tremendo desprecio por la democracia a la que se desgasta con estas actuaciones. Es un engaño pretender presentarse como técnicos al margen de opciones políticas. Cualquier solución técnica de gestión responde a un ideario político y más si se trata de financiar la reconstrucción y decidir si esta se va a financiar con recursos provenientes de la tributación de grandes patrimonios o de los trabajadores, si se va a recaudar tributariamente dentro o fuera de la Comunidad Valenciana, o si se va a optar por reconstruir primero infraestructuras económicas o comerciales, o por el contrario infraestructuras sociales educativas y sanitarias o viviendas de los más vulnerables. El paso dado por el Partido Popular entregando el poder político a militares tras facilitar y estimular la permanente injerencia en política del Poder Judicial, nos demuestra que a la derecha española no le importa nada la democracia y que está permanentemente dispuesta a limitarla con tal de garantizar la defensa de sus privilegios. Es el momento de recordar que el ejercicio de la política, y dentro de esta la construcción de amplias alianzas con perspectiva de transformación social, son la principal herramienta con que cuenta la clase trabajadora con la explotación de unos seres humanos por otros.

Madrid, 1 diciembre 2024